

MADRID

Campo de pruebas de la política educativa del PP

EL PP TIENE en Madrid un magnífico campo de experimentación respecto a su política educativa. Esperanza Aguirre está llevando a la práctica en esta comunidad lo que no pudo hacer cuando era ministra, a saber, la privatización de la educación.

Así, aunque el gasto educativo para 2006 en Madrid crece menos que el total del presupuesto y adelgaza un poco más respecto al total del gasto comunitario (1,5 euros menos de cada 100 respecto a 2003), el dinero destinado a los conciertos multiplica por dos el crecimiento del presupuesto educativo (17% frente al 8,3%), con lo que el peso del gasto en subvenciones a la privada dentro del presupuesto de educación continúa su línea ascendente.

Efectivamente, las transferencias corrientes, donde se sitúan las subvenciones a los conciertos, han incrementado su peso en el total del gasto educativo madrileño, desde 2003, en 5 puntos, los mismos puntos que ha perdido el peso de los gastos de personal -y ello, a pesar de los incrementos retributivos-, mientras que el peso de las partidas más pequeñas (gastos corrientes, inversiones y transferencias de capital) está estancado a la baja.

Este incremento del dinero de los conciertos en Madrid para 2006, en opinión de CC.OO., no va dirigido sólo a financiar los centros que ya están en la red privada concertada, sino a nuevos conciertos, en línea con la estrategia de cesiones de suelo público a particulares que el gobierno de Esperanza Aguirre fomenta en connivencia con ayuntamientos del PP, y que se han multiplicando en esta comunidad en los últimos años.

Se trata de un aumento programado y espectacular de la red privada concertada frente a la red pública que está modificando el sistema educativo de Madrid, alejándolo del resto de territorios del país. Transformación que se está financiando mediante grandes incrementos anuales del dinero público destinado a subvencionar la privada, y cuyo objetivo práctico está siendo la segregación del alumnado según su condición social: la red privada concertada escolariza a alumnado español y sin dificultades, mientras que la pública escolariza al 77% del alumnado de origen inmigrante y a la inmensa mayoría de alumnado de necesidades educativas especiales y de compensatoria. El campo de pruebas que es Madrid para la política educativa más radical del PP está suponiendo un enorme riesgo de fractura social que la LOE no puede ignorar en esta última fase de negociaciones y posibles pactos. Recordemos que entre los principios de la ley se insta fomentar y garantizar la cohesión social.